



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

AMPARO DIRECTO ADMINISTRATIVO 356/2025

QUEJOSO: SUCESIÓN A BIENES DE ** * * * * ***
*** * * * ***

MAGISTRADO **PONENTE:** **JULIO** **ANTONIO** **GÓMEZ**
RODRÍGUEZ.

SECRETARIA: SILVIA VIDAL VIDAL.

Guanajuato, Guanajuato. Sentencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, correspondiente al dieciséis de julio de dos mil veintiséis.

V I S T O para resolver el juicio de amparo directo administrativo **356/2025**; y,

RESULTANDO

PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, el veintitrés de abril de dos mil veinticinco (foja 3 vuelta del expediente en que se actúa) la sucesión a bienes de *****, por conducto de su albacea *****, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal.

En ese libelo, se señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los que enseguida se indican:

AUTORIDAD RESPONSABLE.

- *La H. Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato ...*

Acto Reclamado en este juicio de amparo.

- SEGUNDO. Derechos fundamentales violados.** La parte

TERCERO. Trámite del juicio administrativo. Mediante

V. ACTOS IMPUGNADOS

- SAÚL SILVESTRE ÁNGEL GODÍNEZ
706a6620636a66330000000000000000016e60
10/05/29 08:33:34



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

difuso que le encomienda nuestra Constitución y la Convención sobre Derechos Humanos, tasas de las cuales se presume su aplicación como se explicara en el apartado posterior de este escrito.

III. AUTORIDADES DEMANDADAS.

- i. La H. Tesorería Municipal de León, Guanajuato
- ii. La H. Dirección General de Ingresos de la Tesorería Municipal de León, Guanajuato
- iii. La Dirección de Impuestos Inmobiliarios, adscrita a la aludida Dirección de General de Ingresos, y
- iv. La H. Dirección de Catastro, adscrita a la misma Dirección General de Ingresos
- v. El C. Perito que realizó el avalúo catastral, adscrito a la Tesorería Municipal de León, Guanajuato, cuyo nombre manifiesto bajo protesta de decir verdad que lo desconozco de igual manera el contenido del avalúo en cuestión. Por esta razón solicitó atentamente a esta H. Sala requerir a la Dirección de Catastro demandada, que informe los datos para emplazar al aludido perito.

El conocimiento de la demanda, por razón de turno, correspondió a la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, la que por acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, la registró con el progresivo **3934/1a Sala/2023**, la admitió a trámite y ordenó emplazar a las autoridades demandadas.

El primero de agosto de dos mil veintitrés, se recibieron por medio del sistema informático del Tribunal de Justicia Administrativo del Estado de Guanajuato, diversos oficios por los que contestaron la demanda las autoridades Director de Impuestos Inmobiliarios adscrito a la Dirección General de Ingresos de la Tesorería Municipal; Directora de Catastro adscrita a la Dirección General de Ingresos de la Tesorería Municipal; Director General de Ingresos adscrito a la Tesorería Municipal; y Tesorera Municipal, todos de

La parte actora amplió su demanda inicial en términos del escrito presentado el catorce de diciembre de dos mil veintitrés, lo que se acordó de conformidad en auto de once de junio de dos mil veinticuatro.

***** perito valuador adscrito a la Dirección de Catastro de la Dirección General de Ingresos de la Tesorería Municipal de León, Guanajuato, contestó la demanda y se le previno en los términos que ahí aparecen contenidos, con el apercibimiento que de no cumplir, se tendría por no presentada la contestación a la demanda.

Por auto de cinco de noviembre de dos mil veinticuatro, la Primera Sala agregó el escrito por el que el perito valuador cumplió con la prevención y determinó tener por contestada la demanda.

El veinticinco y veintiséis de junio de dos mil veinticuatro, se recibieron por medio del sistema informático del Tribunal de Justicia Administrativo del Estado de Guanajuato, diversos oficios por el que dieron contestación a la ampliación de demanda, las autoridades Tesorera Municipal; Director de Impuestos Inmobiliarios adscrito a la Dirección General de Ingresos de la Tesorería Municipal; Directora de Catastro adscrita a la Dirección General de Ingresos de la Tesorería Municipal y Director General de Ingresos adscrito a la Tesorería Municipal, todos de León, Guanajuato; los que se acordaron de conformidad por auto de cinco de noviembre de dos mil veinticuatro.

CUARTO. Sentencia reclamada. Seguido el proceso



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

administrativo por su secuela procesal, se dictó la sentencia atinente el once de febrero de dos mil veinticinco, la que concluyó con los siguientes puntos resolutivos:

PRIMERO. Se decreta la **nulidad total** de los actos impugnados atento a lo precisado en el **considerando quinto**.

SEGUNDO. Se reconoce el derecho reclamado por parte de la actora y se condena a las autoridades acorde a lo señalado en el **considerando sexto** del presente fallo.

Notifíquese a las partes. En su oportunidad archívese este expediente, como asunto totalmente concluido y dese de baja del libro de registro de la Primera sala.

QUINTO. Trámite del juicio de amparo. Inconforme con esa resolución, ***** , en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de **** , promovió demanda de amparo directo en su contra, la cual por razón de turno, tocó conocer a este Tribunal Colegiado, en el que por acuerdo de Presidencia de veintidós de mayo de dos mil veinticinco, se radicó como Amparo Directo Administrativo **356/2025** y se desechó la demanda por extemporánea (foja 24 del expediente en que se actúa).

Reclamación. Inconforme, ***** ***** *****
en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de *****
***** ***** por conducto de su autorizado en términos amplios
del artículo 12 de la Ley de Amparo, *****
***** , interpuso recurso de reclamación, el que por auto de dos
de junio de dos mil veinticinco, se radicó bajo el expediente **11/2025**
y se decidió por ejecutoria de veintiséis de junio de dos mil
veinticinco, en el sentido de declararlo fundado (fojas 42 a 51 del

En acatamiento a lo decidido en dicho recurso, mediante acuerdo de Presidencia de cuatro de julio de dos mil veinticinco, se admitió la demanda a trámite y se reconoció como terceras interesadas a quien tiene ese carácter (foja 53 de expediente en que se actúa).

Se dio la intervención legal que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento (foja 57).

Integrado el expediente, mediante acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil veinticinco, se turnaron los autos al Magistrado Ponente, Julio Antonio Gómez Rodríguez, en términos del artículo 183 de la Ley de Amparo, para su estudio y formulación del proyecto de resolución (foja 72); y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con los artículos 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción II, 34, y 170, fracción I, de la Ley de Amparo y 35, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los puntos Primero, fracción XVI, Segundo, fracción XVI, número 1, en la parte que dice: “...dos en *materia administrativa*...” y Tercero, fracción XVI, del Acuerdo General 3/2013, modificado mediante el diverso Acuerdo General 39/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero y el trece de noviembre de dos mil trece, respectivamente, vigente



Se precisa que este asunto se resuelve por videoconferencia, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos judiciales del propio Consejo; asimismo, con fundamento en el numeral 1, párrafo segundo, del Acuerdo General 16/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula las sesiones de los Tribunales Colegiados de Circuito y establece los lineamientos para su videograbación y difusión; así como en el artículo 30, párrafo III, del Acuerdo General del Pleno del Órgano de Administración Judicial AG-POAJ-006/2026 y su anexo técnico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de abril de dos mil veintiséis, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio órgano.

SEGUNDO. Certeza del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, la existencia del acto reclamado —*sentencia de once de*

uedó ac
d respon
pacto que
34/1ª Sa
cia Adm
n. El am
carácter
** *****
e reconoc
e veinticin
en que se
in que s
ue este T
e dos m
n 11/2026
del plazo
da y con
sustento a
cio de nul
la expre
te quejo
sin que
al no e

***** ***** *****

in que s
ue este T
e dos m
n 11/2026
del plazo

da y cono
sustento a
cio de nul
la expre
te quejo
sin que

—al no en

Al respecto, es de citarse —al no encontrarse superada por diverso criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación— la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, que puede consultarse en



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, de rubro: la página de rubro: ***“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE TRANSCRIPCIÓN.”***

SEXTO. Antecedentes.

En el escrito que dio origen al juicio contencioso administrativo local, **** demandó la nulidad de:

Demanda de nulidad.

En el escrito inicial de demanda, la parte actora demandó la nulidad de:

1. Determinación de crédito fiscal por concepto de impuesto predial del segundo bimestre del dos mil trece al sexto bimestre del dos mil veintitrés, del inmueble con cuenta predial ***** , ubicado en calle ***** ** ***** , fraccionamiento ***** *** ***** ***** ***** ** , en León, Guanajuato, por la cantidad de \$254,990.98 doscientos cincuenta y cuatro mil novecientos noventa pesos con noventa y ocho centavos, moneda nacional.

2. Las resoluciones de avalúo con su correspondiente autorización y comunicación de los valores fiscales.

3. La aplicación de tasas progresivas.

En ese libelo inicial, la parte actora dijo desconocer las resoluciones impugnadas, las que, según refirió, no le fueron notificadas.

Ampliación de la demanda.

Una vez que las autoridades contestaron la demanda, la parte actora amplió la demanda inicial, en contra de las notificaciones de las resoluciones impugnadas.

Sentencia.

El conocimiento de la demanda correspondió a la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, donde se radicó bajo el progresivo 3934/1ª Sala/2023, el que se decidió por sentencia de once de febrero de dos mil veinticinco, en la que se decretó la nulidad de los actos impugnados, se reconoció el derecho reclamado por la parte actora y se condenó a las demandadas, en los términos que ahí aparecen contenidos.

SÉPTIMO. Análisis de los conceptos de violación.

En este apartado se realizará la síntesis de los motivos de disenso propuestos, seguido del estudio atinente, a fin de lograr mayor claridad en la exposición.

Omisión de atender argumentos de mayor beneficio.

En el concepto de violación identificado como primero, que en realidad es el único, la parte quejosa sostiene que la Sala no observó los principios de exhaustividad y de mayor beneficio, en relación con los planteamientos hechos en los conceptos de impugnación segundo de la demanda inicial y tercero de su ampliación, así como el apartado denominado *cuestión previa* de la referida ampliación.

Lo anterior, sigue la promovente del amparo, porque desde la demanda de nulidad, se planteó que conoció la existencia del crédito fiscal por impuesto predial, pero no de su contenido, pues no se le hizo de su conocimiento su determinación, ni el avalúo y su

Aduce que en el apartado denominado *cuestión previa* de la ampliación de la demanda, hizo valer que las demandadas ofrecieron en sus diversas contestaciones, escaneos o digitalizaciones que supuestamente contenían actos de ejecución, sin satisfacer los extremos previstos en el artículo 307 K del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato,

Agrega que, pese a tales señalamientos, la Sala implícitamente les reconoció valor probatorio pleno, al considerarlos aptos para probar la existencia de gestiones de cobro e idóneos para interrumpir el plazo extintivo, sin brindar detalles ni explicaciones sobre el hecho de que las demandadas se limitaron a exhibir digitalizaciones no auténticas ni suscritas autógrafamente y, por ello, no satisficieron las cargas procesales, a pesar de que esa argumentación formó parte de la *litis* y las demandadas no refutaron los planteamientos de la actora.

Aduce que, inclusive en el supuesto de que en el expediente de origen se hubiera demostrado plenamente la existencia de gestiones de cobro, la responsable debió analizar si tales gestiones corresponden a las hipótesis legales previstas para interrumpir la caducidad de las facultades de la autoridad fiscal, figura distinta de la prescripción de los créditos fiscales.

Indica que conforme al artículo 39 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, las facultades de las autoridades para determinar la existencia de obligaciones fiscales, señalar las bases para su liquidación o fijarlas en cantidad líquida,



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

imponer sanciones por infracciones, así como para verificar el cumplimiento de las disposiciones, se extinguen en el término de cinco años, el que empezará a correr al día siguiente en que se produjo el hecho generador del crédito.

Sostiene que conforme al numeral 165 de la ley en mención, el impuesto predial deberá cubrirse por anualidad o por bimestre, siendo que tanto en el estado de cuenta como en el recibo del impuesto predial, se hace el cálculo del impuesto de manera bimestral.

Afirma que la responsable apreció equivocadamente que las constancias relacionadas con el procedimiento administrativo de ejecución, eran aptas para suspender la caducidad, cuando dicha hipótesis no está prevista en las leyes fiscales del Estado, toda vez que la caducidad recae sobre las facultades para determinar y liquidar el tributo, lo que debe efectuarse en una resolución determinante fundada y motivada, cuya notificación debe ser previa al despliegue de las facultades de cobro.

Luego, sigue, si mediante estas últimas no se materializa la atribución susceptible de caducar (determinación), su notificación no es el acto idóneo para desacreditar la inacción imputable a la exactora, sino una ilegalidad adicional o independiente de la caducidad, que se consuma independientemente de las gestiones de cobro, mientras el ente fiscal persista en la omisión de notificar una resolución determinante idónea.

Sobre el particular, citó la tesis de rubro: ***“ANTES DE INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, DEBE NOTIFICARSE AL CIUDADANO LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL.”***

able apoy
bro son i
y liquida
a naturale

ndo sin o
de ejecu
de las
, la resp
l notificac

origen, en
aplicación
cada una
cución (a
pago, ac
ta circun
unstancia
didos por

le declar
dial, por
an los a
ruto de u
tal del cre

rubro: “A

reconocio



Los argumentos en mención, los que se analizarán de manera conjunta dada su vinculación, son **fundados** y suficientes para conceder la protección de la Justicia Federal.

De los artículos 1, 298, 299, 300, 301 y 302, entre otros, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se infiere que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es un órgano autónomo, de control de legalidad, dotado de plena jurisdicción e imperio para hacer cumplir sus resoluciones en todo el territorio estatal; de ahí que sea ajeno a la autoridad que emitió el acto impugnado.

Además, en el juicio contencioso administrativo, el tribunal se sujeta a los agravios y en algunos casos está facultado para analizar oficiosamente algunas cuestiones, como la incompetencia de la autoridad que emitió la resolución impugnada y la ausencia total de fundamentación y motivación.

Otras de las características del citado medio de impugnación radican en que:

1. La función del tribunal es dirimir conflictos que se susciten entre la administración pública y los particulares.
2. En el juicio sí existe una verdadera controversia entre el particular afectado y la administración pública, por lo que realiza una función jurisdiccional.

Consecuentemente, de los citados preceptos se advierten algunas reglas que deben observar las sentencias dictadas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, pues se insertan los principios de congruencia y exhaustividad, los supuestos en los que deberá declararse que un acto de autoridad es ilegal, los requisitos mínimos que deben contener esas resoluciones, los casos en los que procede suplir la deficiencia de la queja, los efectos en que es posible dictarlas, las consecuencias de declarar fundada la pretensión del actor, así como los de la condena al pago de daños y perjuicios y, cuándo procede la aclaración de sentencia.

SAUL SILVESTRE ANGEL GODINEZ
706a6620636a6b3300000000000000016e66
10/05/29 08:33:34



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Por eso, se ha indicado que ante propuestas de anulación que contengan diversas causas de ilegalidad (de fondo y forma), el tribunal administrativo tiene el deber de examinar en primer término aquellas que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana, en virtud de que implica examinar el derecho sustantivo controvertido y de obtener ese tipo de anulación resultaría innecesario analizar aspectos formales, puesto que no podrían obtenerse mayores beneficios de los que produce la insubsistencia plena de la resolución impugnada.

Así se desprende de la tesis que enseguida se reproduce, emitida por este Tribunal Colegiado, entonces Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo:

Época: Novena Época

Registro: 166717

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: *Jurisprudencia*

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXX, Agosto de 2009

Materia(s): *Administrativa*

Tesis: XVI.1o.A.T. J/9

Página: 1275

CONCEPTOS DE ANULACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES PREFERENTE EL ESTUDIO DE AQUELLOS QUE CONDUZCAN A DECLARAR LA NULIDAD LISA Y LLANA DEL ACTO IMPUGNADO POR REPRESENTAR UN MAYOR BENEFICIO PARA EL ACTOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO).

El artículo 17 constitucional consagra la garantía de acceso a la impartición de justicia, la cual se encuentra encaminada a asegurar que las autoridades -órganos judiciales o materialmente jurisdiccionales- lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, por lo que uno de los principios que consagra dicha garantía es el de exhaustividad, entendiéndose por tal la obligación de los tribunales de resolver todas las cuestiones sometidas a su conocimiento, sin que les sea lícito dejar de pronunciarse sobre alguna. Por su parte, los numerales 87 y 89, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, establecen la existencia de dos requisitos que deben observarse en el dictado de las resoluciones: el de congruencia y el de exhaustividad. Ahora, si bien es cierto que en la citada ley no existe una disposición expresa que establezca el orden en que deben analizarse los conceptos de anulación, también lo es que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado se encuentra constreñido a ocuparse de todos los motivos de impugnación en que descansa la pretensión anulatoria del actor, y preferentemente de los orientados a declarar la nulidad lisa y

de resulta
ctor, pues s
o, con lo qu
n particular,

sa también
declarato
o consecu
impugna
etensión p
dad de un
andada, p
a contro
al de Jus
dio de dic
uede ver
a de nulida
e tenerse
judicial ri
ue impon
e manera

en los art
a Adminis
e conformi

ente de la
ayan sido
otros da
os, de for
ondiente
exhaustivid



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

disposición legal invocada, pronunciándose respecto de todos y cada uno de los argumentos propuestos.

Caso concreto. Trasladas tales consideraciones al supuesto sometido a estudio, se tiene que en la demanda que dio origen al juicio contencioso administrativo local, la parte actora demandó la nulidad de:

1. Determinación de crédito fiscal por concepto de impuesto predial del segundo bimestre del dos mil trece al sexto bimestre del dos mil veintitrés, del inmueble con cuenta predial *****, ubicado en calle ***** **, fraccionamiento ***** ***, en León, Guanajuato, por la cantidad de \$254,990.98 doscientos cincuenta y cuatro mil novecientos noventa pesos con noventa y ocho centavos, moneda nacional.

2. Las resoluciones de avalúo con su correspondiente autorización y comunicación de los valores fiscales.

3. La aplicación de tasas progresivas.

En ese libelo inicial, la parte actora manifestó desconocer tanto la resolución determinante del crédito fiscal como los avalúos, pues inclusive refirió que no le fueron notificados, como se desprende de la transcripción atinente:

Como lo manifesté líneas arriba, la parte demandada tiene registrado con el carácter de exigible el crédito fiscal por concepto de impuesto predial del inmueble objeto del presente juicio.

Sin embargo, quien suscribe tuvo conocimiento de la existencia, mas no del contenido, de esta determinación con

Ello porque la autoridad liquidadora omitió notificarme la o las resoluciones que contienen la o las determinaciones de los créditos fiscales por concepto de impuesto predial, así como sus accesorios (recargos y gastos de ejecución). Esta circunstancia me deja en estado de indefensión, puesto que hasta la fecha no se conoce el contenido, los fundamentos, los motivos, los antecedentes, los periodos, las tasas, los supuestos valores fiscales ni la suscripción de las resoluciones de la parte impugnada. Por ende, no fue posible para el suscrito actor ejercer una defensa adecuada de mis intereses.

Mientras el numeral 81 del mismo ordenamiento indica que el personal designado para la notificación personal, deberá buscar al destinatario del acto o a su representante legal y, cuando no lo encuentre, le dejará citatorio con cualquier persona mayor de edad que se encuentre en el domicilio para que espere a una hora fija del día hábil siguiente.

Las determinaciones de los créditos son ilegales, ya que al no haberseme notificado las mismas, a la fecha, las facultades de la autoridad demandada para fincar créditos fiscales por los periodos determinados han caducado.

SAUL SILVESTRE ANGEL GODINEZ
706a6620636a6b3300000000000000016e66
10/05/29 08:33:34

tiagto-05f2-utjpg9wf

SAUL SILVESTRE ANGEL CODINEZ
706a6620636a66330000000000000000016e60
10/05/29 08:33:34

- En lo que atañe a la solicitud de inaplicación del artículo 5 inciso fracción II inciso b) de la Ley de Ingresos del Municipio de León, Guanajuato, para los ejercicios fiscales de dos mil trece a dos mil veintitrés, la responsable la consideró procedente, al concluir en la existencia de un trato diferenciado a los propietarios o poseedores de predios edificadas y no edificadas, respecto del pago del impuesto predial, atendiendo a diferentes tasas, el que no está justificado, por lo que consideró procedente su inaplicación.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

En consecuencia, declaró la nulidad parcial de los actos impugnados, a fin de que la autoridad realice el correcto cálculo del impuesto predial a cargo de la parte actora, aplicando la tasa establecida en el artículo 5, fracción II, inciso a) de las Leyes de Ingresos para el Municipio de León, Guanajuato.

Además, cabe destacar que la responsable expresamente consideró dejar a salvo *las facultades discrecionales de las autoridades ejercer nuevamente el procedimiento administrativo de ejecución con las debidas formalidades de ley.*

Lo expuesto pone de manifiesto que la autoridad responsable no cumplió con los principios de congruencia y exhaustividad, que subyacen en los artículos 298 y 299 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, ni tampoco con el principio de mayor beneficio.

Lo anterior se sostiene así, habida cuenta que la responsable no tomó en consideración que desde el escrito inicial de la demanda, el actor negó conocer las resoluciones impugnadas, así como que le hubieran sido notificadas; y al ampliar la demanda, hizo valer vicios en contra de las notificaciones de los actos controvertidos; aspectos los anteriores que no fueron analizados en la sentencia reclamada.

La Sala tampoco tuvo en cuenta que, al ampliar la demanda, el actor cuestionó el valor probatorio de las “escaneos” o “digitalizaciones” que acreditan la existencia de los actos de determinación, valuación y de ejecución impugnados, por las razones que ahí destacó; lo que no fue materia de estudio en la sentencia reclamada.

En efecto, otra cuestión que evidencia la incongruencia de la sentencia reclamada, radica en que se declaró la caducidad de las facultades de la autoridad desde el segundo bimestre del dos mil trece al tercer bimestre del dos mil catorce; y se estimó que respecto al resto de los periodos, (la caducidad) se interrumpió por las gestiones de cobro efectuadas en agosto de dos mil diecinueve.

Ese proceder no es ajustado a derecho, por una parte, porque tal como lo refiere el quejoso, implicó que la Sala implícitamente validó la legalidad de la notificación de esas gestiones de cobro, al considerarlas como parámetro válido para interrumpir la caducidad, sin tomar en cuenta que el actor cuestionó la legalidad de esa notificación al ampliar la demanda de nulidad.

Y por otra parte, porque como lo afirma el inconforme, las constancias relacionadas con el procedimiento administrativo de ejecución, no son aptas para suspender la caducidad, lo que pone de manifiesto que la responsable confundió la caducidad con la prescripción, lo que se afirma si se tiene en cuenta que estimó que las gestiones de cobro *de la resolución determinante del crédito fiscal*, interrumpieron la caducidad.

Tipo: *Jurisprudencia*

Lo anterior, habida cuenta que desde la demanda de nulidad, el actor dijo desconocer los actos impugnados en el juicio contencioso administrativo local, por lo que negó su existencia.

terminar
principios
s exigen
ramente
retativos,
una p
iva la te

judicial de la

NTOS A
NDO SE A
EBIDAME
Por regla g
a cuestión
unal const
apreciación

o de la ev
poderes
ales ordi
ídicas y
omisión lo
el presu
emitirse u
Así cuan

Así, cuando se trata de amparrar la economía por las razones que se consideran que conducen a una mejor función a favor de tanto sobre

resunción
es puedan
respuestas
en resolve
tén abierta
as, es de



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

claramente por las normas jurídicas aplicables o por criterios jurisprudenciales firmes.

OCTAVO. Efectos de la sentencia concesoria.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74, fracción V y 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección de la Justicia Federal a fin de que el Magistrado responsable:

1. Deje insubsistente la sentencia reclamada.

2. Dicte otra en sustitución, en la que

2.1. En primer término, determine el valor probatorio de las “escaneos” o “digitalizaciones” exhibidos por las demandadas a fin de acreditar la existencia de los actos de determinación, valuación y de ejecución impugnados, ello a la luz de los argumentos contenidos en el apartado titulado *CUESTIÓN PREVIA* de la ampliación de la demanda. Lo anterior, habida cuenta que desde la demanda de nulidad, el actor dijo desconocer los actos impugnados en el juicio contencioso administrativo local, por lo que negó su existencia.

2.2. En caso de desestimar los planteamientos efectuados por el actor, aludidos en el párrafo anterior, deberá analizar los vicios propuestos por el actor en torno a la notificación de la resolución determinante; y de declararlos fundados, analizar si ha operado o no la caducidad.

3. Sólo de considerar legal la notificación de la resolución determinante, deberá reiterar el estudio efectuado en torno a la legalidad del avalúo cuestionado.

s notifica
ejecución.
la presc

El artículo
bio de Le
ce a dos
dos en la

con apoyo
se resuelve

Unión an
*** **
os mil ve
ibunal de
o de los
cede para
nsiderativ

del artículo
responsa
pla con lo
ducente
de esta
u oportun
ículo 21 d
n. Judici



Federación, publicado el veinticuatro de junio de dos mil veintiséis, en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se determina que el presente asunto se clasifica como **destruible**.

A S Í, por unanimidad de votos y sin discusión, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, integrado por la magistrada ARIADNA ENRÍQUEZ VAN DER KAM y los magistrados JULIO ANTONIO GÓMEZ RODRÍGUEZ y MARIO ALBERTO DOMÍNGUEZ TREJO, siendo ponente el segundo, quienes conforme a lo dispuesto por el artículo 188 de la Ley de Amparo, firman electrónicamente con el Secretario de Acuerdos SAÚL SILVESTRE ÁNGEL GODÍNEZ, que autoriza y da fe.

MAGISTRADA PRESIDENTA
ARIADNA ENRÍQUEZ VAN DER KAM.
[FIRMA ELECTRÓNICA]

MAGISTRADO PONENTE
JULIO ANTONIO GÓMEZ RODRÍGUEZ.
[FIRMA ELECTRÓNICA]

MAGISTRADO
MARIO ALBERTO DOMÍNGUEZ TREJO.
[FIRMA ELECTRÓNICA]

SECRETARIO DE ACUERDOS
SAÚL SILVESTRE ÁNGEL GODÍNEZ.
[FIRMA ELECTRÓNICA]

RAZÓN. Se hace constar que esta es la última hoja de la resolución pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, en el **amparo directo administrativo 356/2025**, promovido por ***** * ***** ** ***** ***** ***** ***** por conducto de su albacea ***** ***** **** ***** , resuelto en sesión ordinaria virtual de **dieciséis de julio de dos mil veintiséis**. Conste.

SECRETARIO DE ACUERDOS
SAÚL SILVESTRE ÁNGEL GODÍNEZ
[FIRMA ELECTRÓNICA]



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

161364340_1320000038650451008.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 4

FIRMANTE				
Nombre:	SAÚL SILVESTRE ÁNGEL GODÍNEZ		Validez:	BIEN Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.01.6e.60		Revocación:	Bien No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	21/07/26 15:34:43 - 21/07/26 09:34:43		Status:	Bien Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	b6 54 17 3c 6e 19 be 77 aa 5b 37 34 91 8c b9 9d 4f 23 b7 a0 22 6e a7 a5 ca 6b 7b 5c e0 69 6d 62 8c 52 a5 74 c1 b1 04 b3 f4 dc c9 87 82 f7 b6 bc 4e 45 5f d1 db 93 d2 a0 9c cf 43 aa 89 5d 12 f0 2a 4a 5f 70 05 a0 e0 63 4b cb ba 5c cb 8d 9e f5 72 7f ae 3d 29 d0 4a 6c 67 1f 58 8e 4e 2a 85 15 1c 19 c6 1d c6 71 24 65 4e 2f 08 9b e4 04 85 e8 dd fb f5 d8 44 06 a8 97 b4 ba db 02 6a 63 dd 48 1d 3f fe 15 da ec ee e4 a9 74 a6 69 20 57 b2 cd 5e c0 ab 5e f1 da 86 ad 4f 9a a9 13 1a 84 37 ca aa 08 71 91 70 df 53 b6 15 6c 96 77 3e 0d 7f 7b b6 1d ba 20 09 b3 1e 82 28 ad 76 55 3e c7 75 a4 bf c4 48 27 90 f8 ed 28 9c 13 0d 80 31 b0 0e 32 8f ad e3 39 1a e8 b2 48 de 8f f1 67 60 ec b0 b2 16 e7 68 0d c8 0c 3a ba 2b 7e fe 29 1f 5c 9f 7e 6f 68 42 f5 94 09 49 c9 3a 12 8c 43 eb 6b 3c 20 d2 d9 2b 23 73 5e 75 0c b7 e1 15 48 48 cd 08 ba b1 c7 49 b8 4c c4 c6 4f a4 49 61 09 48 b5 29 37 a0 e3 62 c1 e5 82 c2 67 6c 98 ab 38 1b d7 df e4 6c 6d 0f 90 5b 5b d1 82 16 24 41 c5 72 f6 31 5a 94 50 54 d0 8f 4e 13 ed 92 a3 5e 48 b0 08 a8 9b 93 65 5c be cc 7c 82 8a ec ff f8 d6 fc 11 00 3f bd 16 04 ad 61 cf c5 d4 3f e6 46 6e 35 5f 2a ce 9c cf 30 ef cd 06 a7 fe 37 78 a2 8d 1e 67 da a7			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	21/07/26 15:34:43 - 21/07/26 09:34:43			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.01.6e.60			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	21/07/26 15:34:44 - 21/07/26 09:34:44			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	183916741			
Datos estampillados:	SsxGTJFh8/4cYB5ExHyYB6Y9B0=			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	MARIO ALBERTO DOMÍNGUEZ TREJO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.01.53.8c	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	21/07/26 18:22:26 - 21/07/26 12:22:26	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	0d 09 fc 33 1b 6d 36 01 bd 1b 57 b5 dd 0f dd e9 6f 11 9b 2f 64 70 27 de 1e 04 60 31 02 22 38 c4 6d 28 5a 8a 0f ba 3c be b9 98 64 2f e1 fc 79 27 97 88 ee dd b8 54 23 2e 91 4b 55 f1 b2 67 d1 f1 9d b8 c2 f1 16 be 3b 0f a1 2a a0 79 1d 5c 5e 0d ce 41 2d a3 8f 54 b4 08 e8 36 9a 69 76 32 2d 80 68 c5 cc 83 5a 27 8f 2d c1 76 94 5d c3 cb bf 3e b9 b0 20 2e b8 6e 19 11 6a eb e8 55 ef f7 cd c0 10 30 c1 8a 0c 01 56 91 3d 99 7a f5 be 17 9e b7 aa af 6d 1a dc 80 0b bf 47 af bb 18 c8 b2 dd 0b d3 5d 62 8d 89 03 2c 76 31 87 2c 9e 32 5c ee ab a3 ca 6a 44 d5 c5 37 27 63 f5 8c 3b 8e 8a 7f 19 83 54 4e 01 16 6c e1 56 50 49 54 86 ee b6 10 a8 45 8e 73 03 fa c0 be 11 ec ca 8a d8 27 f8 49 c5 a0 42 31 5e 08 24 24 51 1e cd 58 b5 d7 8b 39 71 96 73 a3 bc 7a ab 3f 11 e1 9a 1b 78 1a 65 23 72 d9 2d 4a 11 be 21 76 97 f9 e9 44 4e c7 da e6 61 af a3 fb 53 ab 74 13 fb b9 80 0b 12 cd 2d 69 bf b9 cc 82 fa d6 f4 03 e2 bf cb 67 eb c1 b8 e2 b0 2f 6f a3 83 be 1e a5 52 bd 4d d8 b4 e5 e6 24 d0 75 46 f8 bd 68 a0 1c 5f ca d9 50 e5 3c d4 66 e5 33 9e 86 96 ce 69 82 14 b8 43 a3 2c 7c d6 e1 7e bb 49 9e 84 e9 c3 c3 e3 f4 8f 59 95 b2 bc 3c 19 17 e4 70 97 08 95 7e 8e 4b 33 21 73 d1 94 2f 7b			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	21/07/26 18:22:26 - 21/07/26 12:22:26			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.01.53.8c			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	21/07/26 18:22:26 - 21/07/26 12:22:26			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	184006333			
Datos estampillados:	biDA80/JxB93kWUN52A5PP/I6NA=			



א
ב
ג
ד



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	ARIADNA ENRIQUEZ VAN DER KAM		Validez:	BIEN Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.62.05		Revocación:	Bien No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	21/07/26 20:35:11 - 21/07/26 14:35:11		Status:	Bien Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	24 3d 51 6d 06 87 61 e0 8d 07 b2 e5 01 7d f3 0a 6d de bc db 9c e4 e0 e8 5f b4 f1 0f 78 74 e2 30 e7 c2 b7 f1 73 da 6b b4 37 ee af 6c da c7 8f 26 c5 fc 07 90 25 e5 43 8f b6 b1 51 5e 2e 21 7a 9a 3a b0 ae 00 9f ff 56 17 cd 52 f7 9a 15 26 09 6e 22 b7 46 a5 ea 11 fb 98 e6 7a 40 ae 4b f6 65 db b4 f3 cf 33 83 de 79 b0 10 eb fe 9d 7a 5a 30 48 bf 31 95 52 77 77 0b 8f 12 f4 73 0f 76 8b c7 d4 26 a2 22 a5 1e a8 a9 17 b8 da e5 fe aa fb 61 4b 0e e5 78 ae 76 d0 0a db 12 51 d9 18 c0 c2 9e ed 85 c8 05 bf 4f f8 c8 e6 64 6f 8e b6 2c e6 df b5 9b 5f 9a 15 79 c0 ea 3b b1 8d ef 68 cb 19 fa ee d8 ec d7 39 ce 44 b3 ed 77 f2 ee 6f 9e 50 d9 03 37 1b ab be a9 b2 fc 1f 80 ee a2 e9 5b c3 6a 78 74 a7 19 95 23 1c 55 9c 1e 88 40 dc c8 b8 f3 bd ec 20 b2 9a 71 06 fd 06 1b 7f 83 8f 9b 5b aa b6 0b 56 dd 9b c7 52 eb a4 1a ea 5e 7a cc 22 71 20 61 aa 59 f9 e2 40 6a 3a b0 6b b6 85 75 55 5c 4a 2d a3 76 c8 a4 39 d1 5b 6d 33 e2 f5 9a 6a a3 6d e1 2d dd e0 59 f3 9e 97 3e 4b 6a c6 a5 c0 6d ac 8e 03 64 01 bc 6d e4 af 4a ef f8 c8 07 03 0e 88 c9 3b 5b 13 40 46 5c 52 be 6c 86 f1 ff 95 98 43 ca 47 a1 01 5f f8 90 c0 a4 93 97 59 55 e6 ca 6a b6 b5 cd f5 60 9d e2 d3 16 d6 90 02 f4 28 3d 1b			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	21/07/26 20:35:11 - 21/07/26 14:35:11			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.62.05			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	21/07/26 20:35:11 - 21/07/26 14:35:11			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	184091847			
Datos estampillados:	Zqs6JGAfqQBEIwCA7v48e+qJxjg=			

El diecisiete de julio de dos mil veintiseis, la licenciada Silvia Vidal Vidal, Secretario(a), con adscripción en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, Gto, hago constar y certifico que en esta versión pública no existe información clasificada como confidencial o reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Conste.